



La ciudadanía salió a las calles

Quienes gestionan nuestra salud, educación y seguridad interior anunciaron una medida, escribieron otra y al rato las desdijeron; para, al cabo de algunas horas, agregar más cambios contradictorios y mayor inseguridad. Este ha sido, durante un año, el *espectáculo* del gobierno; la administración de inercias y una irresponsable improvisación. ¿Quién responde?

De marzo del 2020 a marzo del 2021 algunos actores hicieron su parte. Se escribieron las normas, se habilitó el presupuesto que permita implementarlas y se obtuvo el respaldo de una ciudadanía responsable que se quedó fielmente en sus casas, con el compromiso admirable del personal de blanco. Durante ese año, en cambio, los líderes políticos del Poder Ejecutivo no cumplieron su parte. Fallaron licitaciones, sobrefacturaron precios, autorizaron aumentos rígidos, gastaron indebidamente; nos robaron, en definitiva, con clara indiferencia. Cambio tras cambio, decreto tras decreto, la presión fue transfiriéndose al trabajador, al emprendedor, criminalizando su libertad, su circulación, su trabajo, al amparo de normas arbitrarias e inconstitucionales, que impulsaron miles de imputaciones de la Fiscalía General del Estado.

¿Qué espera el gobierno? ¿Sumisión obsecuente? ¿O explorar las fronteras de una explosión social? La ciudadanía cumplió su parte. Fue el gobierno quien violó el *pacta sunt servanda* que nos comprometió a todos a un mismo objetivo. Fue el gobierno quien frustró expectativas sociales; quien discriminó entre *esenciales* y *no esenciales* actividades dignas de cada paraguayo que trabaja, criminalizando las últimas. La situación política actual es responsabilidad exclusiva del gobierno; no del ciudadano que sobrevive *a pesar* del gobierno. Basta de decretos inconstitucionales que plasmen su ineficiencia. Basta de detenciones. Basta de mero cambio de hombres. La política precisa cambiarse a sí misma para que esta se practique –de una vez– para el bien de todos.

La ciudadanía salió a las calles y así lo decretó su clamor. Nos encontramos en un momento histórico; la culminación de un proceso de grave deterioro moral, jurídico y político. No podemos seguir siendo una sociedad de “amigos” en un país que se desangra ante la pasiva mirada de su gobierno y el deterioro de nuestro sistema político basado en privilegios, prebendas, altísimo grado de corrupción e ineficiencia en la gestión sanitaria. El **Colegio de Abogados del Paraguay** se suma a los reclamos, exige toma de decisiones dentro del mandato constitucional y que el ciudadano sepa que encontrará protección del Poder Judicial. Se suma a la crítica firme a un gobierno que debe cumplir su parte y apuntar su gestión y su política, no cargando más al ciudadano libre que trabaja su futuro y el de su familia, sino persiguiendo de manera efectiva la todavía impune corrupción; la verdadera amenaza de los cimientos de la democracia, la república y de nuestra sociedad.